

El valor de los servicios de biodiversidad en la política pública

Mary Luz Moreno Díaz (*)

Mary.moreno.diaz@una.cr

Las funciones ecológicas que se generan en los ecosistemas, una vez que benefician a personas directa o indirectamente se transforman en servicios. Es en este sentido que los servicios ecosistémicos pueden definirse como los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas y pueden ser divididos en cuatro grandes grupos: servicios de soporte, de provisión, de regulación y culturales.

Entre estos servicios están, por ejemplo, la provisión de peces, de agua, de madera, la belleza escénica

para el turismo, la protección contra las tormentas, entre otros. Muchos de los usuarios de la biodiversidad no son conscientes del valor que tiene para ellos su existencia.

Lo que sí es claro, según la Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030, es que una de las causas indirectas de la degradación y pérdida de los recursos naturales y sus servicios es la falta de sistemas de valoración económica y no económica adecuados.

La valoración económica es una herramienta

metodológica que permite aproximar el valor que tiene para la sociedad la existencia de los ecosistemas y de sus servicios. Con lo anterior, se le asigna un valor a estos activos y sus servicios que no cuentan con precios en el mercado, posibilitando la toma de decisiones para su gestión y manejo.

Los procesos de valoración económica de los servicios ecosistémicos deben estar respaldados por análisis adecuados de las diferentes relaciones entre los servicios y los usuarios y de los posibles impactos resultantes de estas relaciones.

En Costa Rica se han generado gran cantidad de documentos relacionados con la aplicación de metodologías de valoración, que pueden ser divididos en cuatro grupos, relacionados con los servicios prestados: por los bosques, por ecosistemas de lagunares y manglares, los que poseen áreas silvestres protegidas y aquellos que cuantifican el daño ambiental.

Esta gran cantidad de esfuerzo en recursos humanos y financieros para la realización de los estudios ha generado, a través de los años, un importante

conocimiento sobre los costos sociales y económicos de la degradación y la biodiversidad y sus posibles repercusiones en las actividades económicas e incluso sociales. Sin embargo, han tenido muy baja incidencia en la política ambiental nacional.

Esto ha venido cambiando y en los últimos años se han oficializado instrumentos de política que contemplan la valoración económica, entre ellos están: la Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030, la Política Nacional para el Pago por Servicios

Ambientales, la Política Nacional de Humedales 2017-2030, la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

En muchos de estos instrumentos todavía no está claro cómo se implementarán los lineamientos relacionados con valoración económica ni cómo se complementará los resultados obtenidos para este tema con los diferentes instrumentos.

(*) Académica Cinpe-UNA.

Los retos de la administración Solís

Panorama complejo marcado por el proceso electoral

Laura Brenes Arce (*)

laura.brenes.arce@una.cr

La administración Solís Rivera ha tenido un panorama muy complejo, con tabilizado hasta la fecha del discurso en el marco del 1 de mayo del 2017. En estos tres primeros años se ha hecho un gran esfuerzo para encontrar un rumbo; se le dio importancia a temas de política económica y social, así como fortalecer la infraestructura y consolidar un gabinete uniforme, más cercano entre sí y con menos enfrentamientos; se notaba una administración de la gestión con aciertos en política social, seguridad y relaciones exteriores; hay una disminución en los niveles de diferencia con el Poder Legislativo, dejando

a un lado el conflicto abierto, sin responder directamente a las críticas al Poder Ejecutivo.

Este último año de gestión estará marcado por el contexto internacional, debido a la sensibilidad económica, política y migratoria existente, la relación con Estados Unidos entorno al NAFTA (TLC), o bien, alguna diferencia en las relaciones bilaterales alrededor de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El contexto nacional está conformado por la presión de fuerzas sociales, políticas y económicas. El



primer reto lo define la cercanía al período preelectoral, en el cual se mezclará la crítica de quienes desean visibilizar lo que no se ha logrado, junto a la presión de su propio partido en la ejecución de líneas que les permita hacer campaña con miras a mantener el electorado del 2014 y aumentarlo. Un segundo reto se deriva de lo ocurrido el

1 de mayo pasado, donde el partido de gobierno pierde la presidencia del directorio y se pone en jaque un tipo de ideología sensible de moral social y constitucional, la cual podría complicar y entabrar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La discusión de un Estado laico está próxima.

El tercer reto lo impone la presión por finalizar acciones iniciadas en política social, infraestructura, dotación de recursos a ciertas poblaciones, así como las expectativas por parte del mismo movimiento sindical. El sector empresarial esperará que se mantenga el

apoyo a la producción y a la inversión privada. El cuarto reto reside en la reforma tributaria. Si bien puede existir voluntad de algunos sectores en la Asamblea Legislativa, no lo van a expresar en congruencia con sus fines electorales.

El quinto reto será disminuir el desempleo, no pudiendo continuar con cifras como el 9%. Este fue un compromiso de campaña. El sexto desafío es la infraestructura: el gobierno debe lograr que las obras iniciadas finalicen y demostrar que se está avanzando en el impacto positivo a la calidad de vida de los y las costarricenses.

Un séptimo reto es la política crediticia y monetaria: el gobierno debe establecer acciones para que las tasas de interés pasiva y activa no afecten a los y las consumidoras. El caso del Banco Crédito Agrícola de Cartago se presenta como una fuente de crisis en el sector. A todo esto debe recordarse la existencia de problemas en la capacidad del sistema político del país «gobernabilidad», un sistema agotado pese a los esfuerzos del Presidente por demostrar un estilo rápido, enérgico y directo.

* Programa Análisis de Coyuntura, Escuela de Sociología-UNA